

Quadernos del Sur

Año 16 - Nº 30

Julio del 2000

Tierra del Fuego

Una nueva situación política

Un nuevo ciclo de crisis, que desde lo social se extiende a lo político, recorre numerosos países de América latina, sin que los regímenes de democracia parlamentaria, instalados luego del ciclo de las dictaduras militares, puedan contenerlas. Ecuador, Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela, Brasil, cada uno de estos países muestra causales específicas y rasgos particulares -fraudes electorales; golpes o intentonas de golpes de Estado; prorrogas electorales; represiones; amenazas de intervencionismo extranjero, confrontaciones sociales extendidas, etc. Pero todas remiten a un origen similar: exclusión social; marginación, empobrecimiento creciente, falta de alternativas; expliación de las naciones; resultante de más de dos décadas de aplicación del modelo neoliberal.

Estas tendencias generales en la región se entrecruzan con un curso de movilización a escala mundial en el que Seattle; Washington; Londres; Berlín; Davos; Seúl han sido escenarios privilegiados.

La protesta se internacionaliza, y el internacionalismo adquiere nuevas formas y nuevos contenidos. Esta se encarna en coaliciones sociales de carácter amplio que incluyen trabajadores; estudiantes; ecologistas; feministas; antiauthoritarios; desocupados; defensores de los derechos humanos, de las minorías étnicas y sexuales; militantes por la anulación de la deuda externa del Tercer Mundo y el combate contra la OMC, que de conjunto rechazan la mundialización capitalista, el gobierno de las trasnacionales y sus efectos sociales y culturales.

Las protestas se levantan contra los organismos internacionales y las corporaciones que tratan las vidas de los seres humanos como

simples mercancías, que diseñan procesos de desarrollo que no toman en cuenta las necesidades e intereses de la mayoría de la población; que colocan al mercado y al dinero como la medida de valor de todos los valores; que borran las culturas nacionales; que construyen una mundialización que no alcanza a albergar a dos tercios de la humanidad y que se corresponde con un verdadero proyecto político hegemónico.

Luego de más de dos décadas el mundo es cada vez más clasista, cada vez más injusto, cada vez más desigual, y tanto la distribución de la riqueza como del poder se ven afectados por esta desigualdad.

En este contexto los gobiernos locales solo se dedican a pensar e implementar políticas al servicio de las corporaciones transnacionales que dominan ampliamente la economía mundial.

Esta realidad quedó crudamente expuesta en los meses de mayo y junio en Argentina, cuando la protesta internacional llegó a Buenos Aires y el Gobierno nacional dio muestras acabadas de disciplinarse a los dictados de los organismos de crédito internacional.

En sólo un semestre de gestión el gobierno de la Alianza ha comenzado a ver como se licúa su

capital político. Si el resultado de las elecciones presidenciales de octubre pasado resultó de una paradojal combinación de hartazgo y rechazo frente a la década menemista, y de desconfianza a lo que se estaba votando, estos seis meses han incorporado incertidumbre y desesperanza.

La razón de esto hay que buscarla en las iniciativas gubernamentales -reforma laboral, incremento de la alícuota de ganancias y baja de los mínimos imponibles, ajuste fiscal con reducción salarial, desregulación de las obras sociales- que con distintas intensidades recaen sobre su base social electoral. Esta comienza a vislumbrar que, salvo medidas tendientes a contener la crisis, no hay ningún plan ni programa de largo o mediano aliento que permita avizorar un futuro diferente a la mediocridad actual.

Si vastos sectores de la sociedad esperaban algún cambio, por pequeño que este fuera, ha quedado entre paréntesis, por el contrario sobrevuela el temor a un nuevo ajuste para finales del año. La profundización del modelo neoliberal, el disciplinamiento absoluto a los organismos financieros internacionales y la

confirmación del rumbo de la política internacional del país no dan lugar a mayores ilusiones.

Pero estos no son más que los epifenómenos políticos de un proceso mucho más profundo, que está determinado por la crisis general que atraviesa al país y la recomposición de alianzas y fuerzas sociales a que está dando lugar. Es en las bases materiales de la sociedad donde hay que buscar los indicios.

El período 1985/1989 se caracterizó por la ausencia de liderazgo ejercido por alguna fracción de la burguesía capaz de llevar adelante un programa de reformas y compromisos previamente acordado. Así las disputas internas al interior bloque dominante agudizaron hasta el paroxismo la crisis de hegemonía, hasta culminar en un inédito proceso hiperinflacionario, los saqueos y la retirada adelantada del elenco gubernamental de turno. A partir de 1989, pero sobre todo de 1991, con la implantación del Plan de Convertibilidad, la transferencia de ingresos y patrimonio público, que significaron las privatizaciones y el freno a la espiral inflacionaria, operó como amalgama para que las distintas fracciones de las clases dominantes acordaran sobre un

programa común bajo la hegemonía del gran capital nativo y extranjero.

Bajo esta hegemonía nuestro país acompañó el proceso de concentración y centralización de capitales a escala mundial -a veces con mayor intensidad aun- y la fenomenal transferencia de recursos hacia los centros de poder mundiales, así como también sus secuelas de desocupación y exclusión, de incremento de la pobreza y de falta de horizontes, como no sea la agudización de las condiciones del presente.

Sin embargo con el agotamiento del modelo neoliberal esta hegemonía comenzó a resquebrajarse, a partir de 1995/96 las disputas interburguesas se hacen cada vez más intensas y estas se dan sobre una base material que muestra que la deuda externa prácticamente se triplicó en solo una década; que el patrimonio público fue vendido y desnacionalizado; que los productos primarios siguen siendo el núcleo central de las exportaciones; que las administraciones provinciales están virtualmente quebradas; que el déficit fiscal excede cualquier posibilidad de financiamiento; que veintidós meses continuados son el récord que muestra la recesión. En estas condiciones el Estado nacional se encuentra imposibilitado

para realizar políticas activas, menos aún para corregir ordenadamente el desfasaje entre la sobrevaluación del peso y la “competitividad” de la economía.

Así la salida de la convertibilidad y la devaluación-dolarización están en el centro de los debates y conflictos al interior del bloque de clases dominantes. Entre los que tienen sus mayores intereses en el mercado interno o en el mundial; entre las fracciones directamente asociadas al capital financiero y que sostienen a rajatabla la convertibilidad y las que pujan por salir de ella; entre las que se vuelcan al MERCOSUR y las que están comprometidas con el Área de Libre Comercio Americana (ALCA).

Esta conflictividad creciente entre fracciones del capital concluyó impactando en la central de trabajadores. Sin embargo fue el debate sobre la reforma laboral el que actuó como un catalizador de las tendencias que desde hace años convivían en la CGT culminando en su fractura.

La reforma laboral impuesta por el gobierno blanquea la situación actual y abre las puertas a una mayor flexibilización de la fuerza de trabajo, pero sus ambiciones son de más largo alcance y se ubican en el plano

político ideológico. Un primer objetivo tiene un carácter más inmediato: está orientado a una nueva baja del llamado “costo laboral” y a desestructurar aún más la organización sindical, como contrapartida de la reestructuración capitalista. El segundo objetivo es del Estado, en tanto representante general de los intereses del capital y se ubica en el largo plazo: establecer los mayores condicionamientos posibles para bloquear a futuro que los trabajadores vuelvan a tener peso, como clase, en la política nacional.

Esta crisis al interior de la CGT ha determinado la existencia de tres centrales obreras -la CGT oficial, ligada a los sectores financieros y de servicios, de corte empresarial, que se ha autonomizado de los intereses de sus afiliados; la CGT “rebelde” se sienta en gremios más ligados a fracciones del capital que necesitan la revitalización del mercado interno y que expresan una suerte de neopopulismo sindical que está a la búsqueda de un nuevo pacto social que tiene que ver con un capitalismo de imposible retorno y la CTA que encarna un nuevo modelo sindical- y ha dinamizado la conflictividad social.

En este contexto la multitudinaria y controvertida (por su composición)

concentración del 31 de mayo contra el FMI, que devino en su desarrollo en expresión política antigubernamental, como respuesta al nuevo ajuste del gobierno, fue precedida por un reguero de conflictos, concentraciones contra el proyecto de reforma laboral; paro general del 5 de mayo y puebladas en el norte y sur del país y tuvo su continuidad en la huelga general del 9 de junio -tal vez la más amplia en décadas- y en el paro y movilización de los trabajadores estatales de todo el país.

La confluencia de contradicciones al interior del bloque dominante y agudización de la lucha de clases plantea un nuevo escenario social. Está en curso una vertiginosa recomposición de alianzas, en las cuales las distintas fracciones de la dirección sindical buscan su lugar, una profundización del modelo actual frente a tendencias neoregulacionistas, pero hay también en juego una dinámica de confrontación que aporta a una nueva relación de fuerzas sociales, donde la reciente y contundente huelga general juega como catalizador de la voluntad popular de un cambio en la situación general.

A la par que la política se ha vuelto profundamente conservadora los partidos mayoritarios parecieran no poder escapar de un programa

único impuesto por el establishment. Programa que no es otro que la reproducción de las condiciones vigentes. En el marco de la crisis el PJ ha dejado de ser la correa de transmisión del movimiento obrero frente a las instituciones y las viejas tendencias a la autonomía social del movimiento parecieran cobrar nuevas fuerzas abriendo así nuevas posibilidades para la acción política.

Este conjunto de situaciones no hace más que agudizar la crisis de representatividad que corroa a las instituciones de la democracia parlamentaria y a los propios partidos y determina un panorama más complejo en la gobernabilidad del sistema.

Consciente de esta realidad el gobierno nacional intentó presentar como un plebiscito las recientes elecciones para Jefe de Gobierno en la Cdad. de Buenos Aires. Sin embargo su holgado triunfo no alcanza para ocultar el 30% de abstenciones; que perdiera más de diez puntos en relación a la última elección en el distrito; que su bancada legislativa se haya reducido en 12 escaños, que la derecha liberal haya realizado una fuerte elección, y que la izquierda, superando los pronósticos más optimistas, alcanzara en su conjunto un 12% de los votos

válidos redondeando una bancada reducida pero destacable.

En el tránsito de un siglo a otro y frente a un cuadro de situación caracterizado por la agudización de la lucha de clases, la izquierda tiene ante sí nuevos desafíos. Entre ellos no es menor el de contribuir a la construcción de un polo

contrahegemónico a la actual hegemonía neoliberal, que bloquee cualquier salida autoritaria o por derecha a la crisis y que por el contrario garantice un curso progresista orientado al socialismo.

Eduardo Lucita
Bs. As. Julio del 2000

dialéktica

Secretaría General C.E.F.y L. • Revista de Filosofía y Teoría Social